

**No. 39441**

---

**Argentina  
and  
Peru**

**Convention between the Argentine Republic and the Republic of Peru on the transfer of sentenced persons. Lima, 12 August 1998**

**Entry into force:** *31 March 2001 by the exchange of instruments of ratification, in accordance with article XIV*

**Authentic text:** *Spanish*

**Registration with the Secretariat of the United Nations:** *Argentina, 7 July 2003*

---

**Argentine  
et  
Pérou**

**Convention sur le transfert des personnes condamnées entre la République argentine et la République du Pérou. Lima, 12 août 1998**

**Entrée en vigueur :** *31 mars 2001 par échange des instruments de ratification, conformément à l'article XIV*

**Texte authentique :** *espagnol*

**Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies :** *Argentine, 7 juillet 2003*

[ SPANISH TEXT — TEXTE ESPAGNOL ]

**CONVENIO  
SOBRE  
TRASLADO DE PERSONAS CONDENADAS  
ENTRE  
LA REPUBLICA ARGENTINA  
Y  
LA REPUBLICA DE PERU**

La República Argentina y la República del Perú, en adelante las Partes;

Deseando Facilitar la rehabilitación social de las personas condenadas, mediante la adopción de métodos adecuados;

Considerando que deben lograrse estos objetivos dándoles a los nacionales privados de su libertad o en régimen de libertad condicional, como consecuencia de una sentencia penal, la posibilidad de cumplir su condena en su medio social de origen;

Han convenido celebrar el siguiente Convenio sobre Traslado de Personas Condenadas;

**ARTICULO I  
DEFINICIONES**

A los efectos del presente Convenio:

1. "Sentencia", designará una resolución o fallo final dictado por un órgano judicial con el cual termina el proceso penal y se impone una condena.
2. "Persona condenada", designará a un apersona que cumpla una condena impuesta por sentencia consentida o ejecutoriada, es decir, no sujeta a posterior impugnación.

3. "Estado receptor", designará al Estado al cual la persona condenada puede ser trasladada o lo haya sido ya, con el fin de cumplir su condena.
4. "Estado trasladante", designará al Estado que haya impuesto una condena y del cual la persona condenada pueda ser trasladada o lo haya sido ya.
5. "Condena", designará cualquier pena o medida privativa de la libertad por cumplirse en un establecimiento penal, hospital u otra institución en el Estado trasladante, que haya impuesto un órgano judicial, con una duración limitada o indeterminada, por razón de un delito o infracción penal.

## **ARTICULO II**

### **PRINCIPIOS GENERALES**

1. Las Partes se obligan, en las condiciones previstas por el presente Convenio a prestarse mutuamente la más amplia colaboración posible en materia de traslado de personas condenadas.
2. Una persona condenada en el territorio de una Parte, podrá, con arreglo a lo dispuesto en el presente Convenio, ser trasladada a la otra Parte para cumplir la condena que se le haya impuesto. Con tal fin, podrá expresar, bien al Estado trasladante o bien al Estado receptor, su deseo que se le traslade en virtud del presente instrumento internacional.
3. El traslado podrá ser solicitado por el Estado trasladante o por el Estado receptor.

## **ARTICULO III**

### **CONDICIONES PARA EL TRASLADO**

El presente Convenio se aplicará bajo las siguientes condiciones:

1. Que la persona condenada sea nacional del Estado receptor.
2. Que la parte de la condena que faltare por cumplir al momento de efectuarse la solicitud sea superior a dos años.
3. Que la sentencia sea firme o definitiva y que no queden pendientes procedimientos extraordinarios de revisión en el momento de invocar las disposiciones del Convenio.
4. La persona trasladada no podrá ser nuevamente enjuiciada en el Estado receptor por el delito que motivó la condena impuesta por el Estado trasladante y su posterior traslado.

5. Que la persona condenada, o una persona autorizada a actuar en su nombre, cuando por razón de su edad o de su estado físico o mental, una de las Partes así lo estimare necesario, consienta el traslado.
6. Que la persona condenada haya cumplido o garantizado el pago, a satisfacción del Estado trasladante, de las multas, gastos de justicia, reparación civil y condenas pecuniarias de toda índole que corren a su cargo de acuerdo a lo dispuesto en la sentencia condenatoria. Se exceptúa a la persona condenada que acredite debidamente su absoluta insolvencia.
7. Que el Estado trasladante y el Estado receptor manifiesten expresamente su acuerdo con el traslado.
8. Que se haya conmutado una eventual pena de muerte.

#### **ARTICULO IV** **OBLIGACION DE FACILITAR INFORMACIONES**

1. Las Partes se comprometen a poner el presente Convenio en conocimiento de cualquier persona condenada a quien pudiera aplicársele.
2. Si la persona condenada hubiera expresado al Estado trasladante su deseo de ser trasladada en virtud del presente Convenio, dicho Estado deberá informar de ello al Estado receptor con la mayor diligencia posible después de que la sentencia quede firme.
3. Las informaciones comprenderán:
  - a) El nombre y apellidos, la fecha y el lugar de nacimiento de la persona condenada.
  - b) En su caso, su dirección en el Estado receptor.
  - c) Una exposición de los hechos que hayan originado la condena.
  - d) La naturaleza, duración y fecha de inicio de la condena.
  - e) Copia certificada de la sentencia y
  - f) Cualquier otra información que el estado receptor pueda requerir para permitirle considerar la posibilidad de traslado, así como para informar a la persona condenada y al Estado trasladante de las consecuencias del traslado para la persona condenada según su ley.

4. Si la persona condenada hubiera expresado al estado receptor su deseo de ser trasladada, el Estado trasladante comunicará a dicho Estado, a petición suya, las informaciones a que se refiere el numeral 3 que antecede.

5. Deberá informarse por escrito a la persona condenada de cualquier gestión emprendida por el Estado trasladante o el Estado receptor en aplicación de los numerales precedentes, así como de cualquier decisión tomada por uno de los dos Estados respecto a una petición de traslado.

#### **ARTICULO V SOLICITUD DE TRASLADO**

1. Cada traslado de personas argentinas condenadas se iniciará mediante una petición hecha por escrito y presentada por la Embajada de la República Argentina en la República del Perú al Ministerio de Relaciones Exteriores.

2. Cada traslado de personas peruanas condenadas se iniciará mediante una petición hecha por escrito y presentada por la Embajada de la República del Perú en la República Argentina al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.

3. Si el Estado trasladante considera la petición de traslado de la persona condenada y expresa su consentimiento, el Estado Trasladante comunicará lo antes posible al Estado receptor su aprobación, de modo que una vez que se hayan completado los arreglos internos se pueda efectuar el traslado.

4. La entrega de la persona condenada por las autoridades del estado trasladante a las del Estado receptor se hará en el lugar que convengan ambas Partes. El Estado receptor será responsable de la custodia de la persona condenada y de su transporte desde el Estado trasladante. La entrega constará en un acta.

5. Para tomar la decisión relativa al traslado de una persona condenada y de conformidad con el objeto que el traslado contribuya positivamente a su rehabilitación social, la autoridad de cada una de las Partes considerará, entre otros factores, la gravedad del delito y las posibles vinculaciones del autor con el crimen organizado, su estado de salud y los vínculos que pueda tener con la sociedad del Estado trasladante y del Estado receptor.

6. Cuando cualquiera de las Partes no apruebe el traslado de una persona condenada, notificará su decisión sin demora a la otra Parte, pudiendo expresar la causa o motivo de la denegatoria.

7. Negada la autorización del traslado, el estado receptor no podrá efectuar un nuevo pedido, pero el Estado trasladante podrá revisar su decisión a instancia del Estado receptor cuando éste alegare circunstancias excepcionales.

8. Antes de efectuarse el traslado, el Estado trasladante brindará al Estado receptor, si éste lo solicita, la oportunidad de verificar, mediante un funcionario designado por vía diplomática por el Estado receptor de acuerdo a sus leyes, que el consentimiento de la persona condenada ha sido dado de manera voluntaria y con pleno conocimiento de las consecuencias legales inherentes al mismo.

9. Los gastos ocasionados con motivo del traslado, correrán a cargo del Estado receptor. Sin embargo, éste podrá intentar que la persona condenada devuelva la totalidad o parte de los gastos de traslado.

## ARTICULO VI DOCUMENTACION SUSTENTATORIA

1. El Estado receptor, a petición del estado trasladante, facilitará a este último los documentos siguientes:

a) Una copia de las disposiciones legales pertinentes del Estado receptor, de las cuales resulte que los actos u omisiones que hayan dado lugar a la condena en el Estado trasladante, constituyen un delito o infracción penal.

b) Una declaración del efecto, con respecto a la persona condenada, de cualquier ley o reglamento pertinente relativo a su detención en el Estado receptor después de su traslado.

2. Si se solicitare un traslado, el Estado trasladante deberá facilitar al Estado receptor los documentos que a continuación se expresan, a menos que una u otra de las Partes haya indicado su desacuerdo con el traslado:

a) Una copia de la sentencia y de las disposiciones legales aplicadas.

b) La indicación de la duración de la condena ya cumplida, incluida la información referente a cualquier detención preventiva, remisión de pena u otra circunstancia relativa al cumplimiento de la condena.

c) Una declaración en la que conste el consentimiento para el traslado a que se refiere el numeral 5 del Artículo III ante la autoridad consular competente.

d) Cuando proceda cualquier informe médico o social acerca de la persona condenada, cualquier información sobre su tratamiento en el Estado trasladante y cualquier recomendación para la continuación de su tratamiento en el Estado receptor.

3. Si el Estado receptor considera que los informes suministrados por el Estado trasladante no son suficientes para permitirle la aplicación del presente Convenio, podrá solicitar información complementaria.

4. Los documentos que se entreguen de estado a Estado, en aplicación del presente Convenio, serán eximidos de las formalidades de legalización.

#### **ARTICULO VII INFORMACION ACERCA DEL CUMPLIMIENTO**

El Estado Receptor facilitará información al Estado trasladante acerca del cumplimiento de la condena:

- a) Cuando se haya cumplido la condena;
- b) Si la persona condenada se evadiere; o
- c) Si el Estado trasladante le solicitare un informe especial.

#### **ARTICULO VIII JURISDICCION**

El Estado trasladante mantendrá jurisdicción exclusiva sobre la condena impuesta y cualquier otro procedimiento que disponga la revisión o modificación de las sentencias dictadas por sus órganos judiciales. El Estado trasladante retendrá, asimismo, la facultad de indultar o conceder amnistía o clemencia a la persona condenada. El Estado receptor al recibir aviso de cualquier decisión al respecto, deberá adoptar con prontitud las medidas que correspondan en concordancia con su legislación sobre la materia.

#### **ARTICULO IX CUMPLIMIENTO DE LA PENA**

1. La ejecución de la pena de la persona condenada trasladada se cumplirá de acuerdo a las normas del régimen penitenciario del estado receptor. En ningún caso puede modificarse por

su naturaleza o por su duración, la pena privativa de libertad pronunciada por el Estado trasladante.

2. Ninguna condena a pena privativa de libertad será ejecutada por el Estado receptor de tal manera que prolongue la duración de privación de libertad más allá del término de prisión impuesto por la sentencia del tribunal del estado trasladante.

3. Si un nacional de una Parte estuviera cumpliendo una condena impuesta por la otra Parte bajo el régimen de condena condicional o de la libertad condicional, anticipada o vigilada, podrá cumplir dicha condena bajo vigilancia de las autoridades del Estado receptor.

4. La autoridad judicial del Estado trasladante solicitará las medidas de vigilancia que interesen, mediante exhorto que diligenciará por la vía diplomática.

5. Para los efectos del presente Artículo, la autoridad judicial del estado receptor podrá adoptar las medidas de vigilancia solicitadas y mantendrá informado al exhortante sobre la forma en que se llevan a cabo y le comunicará de inmediato el incumplimiento por parte del condenado de las obligaciones que éste haya asumido.

#### **ARTICULO X MENOR BAJO TRATAMIENTO ESPECIAL**

El presente Convenio se aplicará a menores bajo tratamiento especial conforme a las leyes de las Partes. La ejecución de la medida privativa de libertad que se aplique a tales menores de edad se cumplirá de acuerdo a las leyes del Estado receptor. Pare el traslado se deberá obtener el consentimiento expreso del representante legal del menor.

#### **ARTICULO XI FACILIDADES DE TRANSITO**

1. Si cualquiera de las Partes celebrara un Convenio para el traslado de personas condenadas con un tercer Estado, la otra Parte deberá colaborar facilitando el tránsito por su territorio, de las personas condenadas en virtud de dicho Convenio.

2. El Estado que tenga intención de efectuar tal traslado, deberá dar aviso previo de ésta a la otra Parte.



**ARTICULO XII  
APLICACION TEMPORAL**

El presente Convenio podrá aplicarse también al cumplimiento de condenas dictadas antes de su entrada en vigor.

**ARTICULO XIII  
PROSECUSION DEL CUMPLIMIENTO**

Con el objeto de cumplir con los propósitos del presente Convenio, cada una de las Partes adoptará las medidas legislativas necesarias y establecerá los procedimientos administrativos adecuados para que la sentencia con pena privativa de libertad y medidas de seguridad privativas de libertad impuestas por el Estado trasladante tengan efecto legal en el Estado receptor.

**ARTICULO XIV  
VIGENCIA DEL CONVENIO**

- I. El presente Convenio quedará sujeto a ratificación y entrará en vigor a los 30 días a partir de la fecha del intercambio de los respectivos instrumentos de ratificación.
2. Este Convenio tendrá una duración indefinida. Cualquiera de las Partes podrá denunciarlo, mediante notificación escrita a través de la vía diplomática. La denuncia será efectiva 180 días después de haberse efectuado dicha notificación.  
En fe de lo cual los infrascritos, firman el presente Convenio.

Hecho en Lima, el doce de agosto de mil novecientos noventa y ocho, en dos ejemplares originales en idioma castellano, siendo ambos textos igualmente auténticos.

Por la República Argentina

Por la República del Perú

[TRANSLATION - TRADUCTION]

CONVENTION BETWEEN THE ARGENTINE REPUBLIC AND THE  
REPUBLIC OF PERU ON THE TRANSFER OF SENTENCED PERSONS

The Argentine Republic and the Republic of Peru, hereinafter referred to as the "Parties",

Desiring to facilitate the social rehabilitation of sentenced persons through the adoption of adequate measures,

Considering that these objectives should be achieved by enabling nationals deprived of their liberty or on conditional release as a consequence of a criminal conviction to serve their sentences in their social environment of origin,

Have agreed to conclude the following Convention on the transfer of sentenced persons:

*Article I. Definitions*

For the purposes of this Agreement:

1. "Judgment" means the final judicial resolution or decision handed down by a court imposing a sentence as the culmination of a criminal trial;
2. "Sentenced person" means a person serving a sentence under a final, enforceable judgement - in other words, one which is not subject to subsequent appeal;
3. "Receiving State" means the State to which the sentenced person may be, or has been, transferred in order to serve his sentence;
4. "Transferring State" means the State in which the judgement was handed down and from which the sentenced person may be, or has been, transferred; and
5. "Sentence" means any punishment or measure involving deprivation of liberty, to be served in a prison, hospital or other institution in the transferring State, which has been ordered by a court for a limited or unlimited period of time on account of a criminal offence or infraction.

*Article II. General principles*

1. The Parties undertake to afford each other the widest measure of cooperation in respect of the transfer of sentenced persons in accordance with the provisions of this Convention.
2. A person sentenced in the territory of one Party may be transferred to the territory of another Party, in accordance with the provisions of this Convention, in order to serve the sentence imposed on him. To that end, he may express to the transferring State or to the receiving State his interest in being transferred under this international instrument.
3. Transfer may be requested by either the transferring State or the receiving State.

*Article III. Conditions for transfer*

This Agreement shall apply only on condition that:

1. The sentenced person is a national of the receiving State;
2. At least two years of the sentence remain to be served at the time the request is made;
3. The sentence is final and conclusive and no special review procedures are pending at the time when the provisions of this Agreement are invoked;
4. The transferred person may not again be tried in the receiving State for the offence on which the sentence imposed by the transferring State and his subsequent transfer were based;
5. The sentenced person or, where in view of his age or his physical or mental condition one of the two States considers it necessary, his legal representative, consents to the transfer;
6. The sentenced person has paid or guaranteed payment of, to the satisfaction of the transferring State, all fines, legal expenses, civil damages and pecuniary penalties of any kind for which he is liable under the terms of the sentence. An exception shall be made if the sentenced person submits adequate proof of his absolute insolvency.
7. The transferring State and the receiving State give their explicit consent to the transfer; and
8. Any death sentence has been commuted.

*Article IV. Obligation to furnish information*

1. The Parties undertake to bring this Agreement to the attention of any sentenced person to whom it may apply.
2. If the sentenced person has expressed to the transferring State his interest in being transferred under this Agreement, that State shall so inform the receiving State as soon as practicable after the judgement becomes final.
3. The information shall include:
  - (a) The name, date and place of birth of the sentenced person;
  - (b) His address, if any, in the receiving State;
  - (c) A statement of the facts upon which the sentence was based;
  - (d) The nature, duration and date of commencement of the sentence;
  - (e) A certified copy of the judgement; and
  - (f) Any other information that the receiving State may require in order to consider the possibility of a transfer and to inform the sentenced person and the transferring State of the legal consequences thereof.
4. If the sentenced person has expressed to the receiving State his desire to be transferred, the transferring State shall, on request, communicate to the receiving State the information referred to in paragraph 3 above.

5. The sentenced person shall be informed, in writing, of any action taken by the transferring State or by the receiving State under the preceding paragraphs, as well as of any decision taken by either State on a request for transfer.

*Article V. Request for transfer*

1. Each transfer of a sentenced Argentine person shall be initiated through a written request submitted by the Embassy of the Argentine Republic in the Republic of Peru to the Ministry of Foreign Affairs.

2. Each transfer of a sentenced Peruvian person shall be initiated through a written request submitted by the Embassy of the Republic of Peru in the Argentine Republic to the Ministry of Foreign Affairs, International Trade and Worship.

3. If the transferring State considers the request for transfer of the sentenced person and agrees thereto, it shall promptly inform the receiving State of its approval so that, once internal arrangements have been completed, the transfer may be effected.

4. The authorities of the transferring State shall deliver the sentenced person to the authorities of the receiving State at a place agreed upon by the Parties. The receiving State shall be responsible for custody of the sentenced person and for his transport from the transferring State. Delivery of the prisoner shall be recorded in an official document.

5. In taking a decision on the transfer of a sentenced person, and in accordance with the objective that the transfer should promote his social rehabilitation, the authority of each Party shall consider, among other factors, the seriousness of the offence and any links between the offender and organized crime; his state of health; and any ties that he may have with the society of the transferring State and of the receiving State.

6. If either Party does not approve the transfer of a sentenced person, it shall notify the other Party of its decision immediately and may explain the cause of or reason for the refusal.

7. If authorization for the transfer is refused, the receiving State may not make a further application; however, the transferring State may review its decision at the request of the receiving State if the latter maintains that special circumstances exist.

8. Before the transfer is carried out, the transferring State shall afford an opportunity to the receiving State to verify, if it so desires, through an official designated by the receiving State through the diplomatic channel in accordance with its legislation, that the sentenced person's consent was given voluntarily in full knowledge of the legal consequences thereof.

9. Expenses arising in connection with the transfer shall be borne by the receiving State. However, it may attempt to seek from the sentenced person reimbursement of the costs of the transfer in whole or in part.

*Article VI. Supporting documents*

I. The receiving State, if requested by the transferring State, shall provide it with the following documents:

(a) A copy of the relevant law of the receiving State which provides that the acts or omissions on account of which the sentence was imposed in the transferring State constitute a criminal offence or violation; and

(b) A statement of the effect on the sentenced person of any relevant law or regulation relating to his detention in the receiving State following his transfer.

2. If a transfer is requested, the transferring State shall provide the following documents to the receiving State unless either Party has already indicated that it will not approve the transfer:

(a) A copy of the judgement and of the law on which it is based;

(b) A statement indicating how much of the sentence has already been served, including information on any pre-trial detention, remission or any other factor relevant to the enforcement of the sentence;

(c) A statement attesting that consent to the transfer was given before the competent consular authority, as mentioned in article III, paragraph 5; and

(d) Whenever appropriate, any medical or social reports on the sentenced person, any information about his treatment in the transferring State and any recommendation for his further treatment in the receiving State.

3. If the receiving State considers that the reports supplied by the transferring State are not sufficient to enable it to implement this Agreement, it may request additional information.

4. Any documents provided by one State to the other State under the terms of this Agreement shall be exempt from the formalities of legalization.

#### *Article VII. Information on enforcement*

The receiving State shall provide the transferring State with information on the enforcement of the sentence:

(a) When the sentence has been completed;

(b) If the sentenced person escapes; or

(c) If the transferring State requests a special report.

#### *Article VIII. Jurisdiction*

The transferring State shall retain full jurisdiction with regard to the sentences issued, and to any other procedures aimed at reviewing or modifying the judgements handed down, by its courts. It shall also retain the power to grant pardon, amnesty or mercy to the sentenced person. The receiving State, upon receiving notice of any decision in this regard, must take the corresponding measures immediately in accordance with its legislation in that area.

*Article IX. Enforcement of the sentence*

1. Enforcement of the transferred person's sentence shall be governed by the regulations of the receiving State's prison system. Under no circumstances may it modify the nature or duration of the custodial sentence imposed by the transferring State.
2. No custodial sentence may be enforced by the receiving State in such fashion as to lengthen the sentence beyond the date on which it would expire under the terms of the judgement handed down by the court in the transferring State.
3. If a national of one Party is serving a sentence imposed by the other Party under a regime of early or supervised conditional release or parole, he may serve his sentence under the supervision of the authorities of the receiving State.
4. The judicial authority of the transferring State shall request the relevant measures of supervision by means of a letter rogatory served through the diplomatic channel.
5. For the purposes of this article, the judicial authority of the receiving State may take the measures of supervision requested, shall keep the requesting authority informed of the manner in which those measures are being carried out and shall notify it immediately of any failure of the convicted person to fulfil the obligations which he has assumed.

*Article X. Juveniles subject to special treatment*

This Agreement shall apply to juveniles subject to special treatment under the legislation of the Parties. Execution of a custodial sentence imposed on such juveniles shall be carried out in accordance with the legislation of the receiving State. Express consent to the transfer must be obtained from the legally authorized representative of the juvenile.

*Article XI. Facilitation of transit*

1. If either Party concludes an agreement for the transfer of sentenced persons with a third State, the other Party shall cooperate in facilitating the transit of sentenced persons through its territory under the said agreement.
2. A State which intends to carry out such a transfer shall give the other Party advance notice of its intention.

*Article XII. Temporal application*

This Agreement shall also be applicable to the enforcement of sentences imposed prior to its entry into force.

*Article XIII. Facilitation of implementation*

In order to achieve the objectives of this Agreement, each Party shall adopt the necessary legislative measures and shall establish appropriate administrative procedures so that custodial sentences and security measures involving deprivation of liberty imposed by the transferring State shall have legal effect within the receiving State.

*Article XIV. Period of validity of the Agreement*

1. This Agreement shall be subject to ratification and shall enter into force 30 days after the date of exchange of the respective instruments of ratification.

2. This Agreement shall remain in force indefinitely. Either Party may terminate it by giving written notice through the diplomatic channel. The termination shall take effect 180 days after such notice has been given.

In witness of which, the undersigned have signed this Agreement.

DONE at Lima on 12 August 1998 in two original copies in the Spanish language, both texts being equally authentic.

For the Republic of Argentina:

GUIDO DI TELLA

For the Republic of Peru:

EDUARDO FERRERO COSTA

[TRANSLATION - TRADUCTION]

## CONVENTION SUR LE TRANSFERT DES PERSONNES CONDAMNÉES ENTRE LA RÉPUBLIQUE ARGENTINE ET LA RÉPUBLIQUE DU PÉROU

La République argentine et la République du Pérou, ci-après dénommées " les Parties ";

Souhaitant faciliter la réinsertion sociale des personnes condamnées grâce à l'adoption de méthodes adéquates;

Considérant que cet objectif doit être atteint en donnant aux nationaux privés de leur liberté ou placés en liberté conditionnelle à la suite d'un jugement pénal la possibilité de purger leur peine dans leur milieu social d'origine;

Sont convenues de signer la Convention ci-après sur le transfert des personnes condamnées.

### *Article premier. Définitions*

Aux fins de la présente Convention :

1. Le mot " jugement " désigne la décision ou la sentence finale d'un organe judiciaire mettant un terme à la procédure pénale et donnant lieu à une condamnation.
2. L'expression " personne condamnée " désigne une personne qui purge une peine à la suite d'un jugement accepté ou confirmé, à savoir qui ne peut faire l'objet d'un recours.
3. L'expression " État d'accueil " désigne l'État vers lequel la personne condamnée peut être transférée ou a déjà été transférée afin de purger sa peine.
4. L'expression " État de transfert " désigne l'État qui a prononcé une condamnation et à partir duquel la personne condamnée peut être transférée ou l'a déjà été.
5. Le mot " condamnation " désigne toute peine ou mesure privative de liberté devant être purgée dans un établissement pénitentiaire, un hôpital ou une autre institution de l'État de transfert, infligée par un organe judiciaire pour une durée limitée ou indéterminée à la suite d'un délit ou d'une infraction pénale.

### *Article II. Principes généraux*

1. Les Parties s'engagent, dans les conditions prévues par la présente Convention, à collaborer dans toute la mesure possible pour ce qui est du transfert des personnes condamnées.
2. Une personne condamnée sur le territoire de l'une des Parties peut, conformément aux dispositions de la présente Convention, être transférée vers le territoire de l'autre Partie pour purger la peine qui lui a été infligée. Elle peut, à cette fin, faire part, soit à l'État de



transfert soit à l'État d'accueil, de son désir d'être transférée en vertu du présent instrument international.

3. Le transfert peut être demandé soit par l'État de transfert soit par l'État d'accueil.

#### *Article III. Conditions de transfert*

L'application de la présente Convention est subordonnée aux conditions ci-après :

1. La personne condamnée doit être un national de l'État d'accueil.
2. La partie de la peine qui reste à purger au moment où la demande est faite doit être supérieure à deux ans.
3. Le jugement doit être ferme ou définitif et aucune procédure extraordinaire de révision ne doit être pendante au moment où les dispositions de la Convention sont invoquées.
4. La personne transférée ne peut être jugée de nouveau dans l'État d'accueil pour le délit qui a motivé la condamnation prononcée par l'État de transfert et son transfert ultérieur.
5. La personne condamnée, ou une personne autorisée à agir en son nom, quand pour une raison d'âge ou d'état physique ou mental, l'une des Parties l'estime nécessaire, doit consentir au transfert.
6. La personne condamnée doit avoir, à la satisfaction de l'État de transfert, payé les amendes, frais de justice, dommages civils et dommages-intérêts de toute nature à sa charge, ou en avoir garanti le paiement conformément aux dispositions du jugement condamnatif. Une exception est faite pour la personne condamnée qui a dûment prouvé son insolvabilité absolue.
7. L'État de transfert et l'État d'accueil s'accordent de manière expresse sur le transfert.
8. Toute éventuelle peine de mort a été commuée.

#### *Article IV. Obligation de fournir des renseignements*

1. Les Parties s'engagent à faire connaître la présente Convention à toute personne condamnée à laquelle elle peut s'appliquer.
2. Si la personne condamnée a fait savoir à l'État de transfert qu'elle souhaitait être transférée en vertu de la présente Convention, ledit État doit en informer l'État d'accueil dès que possible après le prononcé du jugement ferme.
3. Les renseignements fournis comprennent :
  - a) Le prénom, les noms et la date et le lieu de naissance de la personne condamnée;
  - b) Le cas échéant, son adresse dans l'État d'accueil;
  - c) Une exposition des faits à l'origine de la condamnation;
  - d) La nature, la durée et la date de commencement de la peine;
  - e) La copie certifiée du prononcé du jugement;

f) Tout autre renseignement que l'État d'accueil peut demander pour envisager la possibilité d'un transfert et informer la personne condamnée et l'État de transfert des conséquences juridiques du transfert pour la personne condamnée.

4. Si la personne condamnée a fait savoir à l'État d'accueil qu'elle souhaitait être transférée, l'État de transfert doit fournir audit État, sur sa demande, les renseignements mentionnés à l'alinéa 3 ci-dessus.

5. Il conviendrait d'informer par écrit la personne condamnée de toute démarche entreprise par l'État de transfert ou l'État d'accueil en application des alinéas ci-dessus ainsi que de toute décision adoptée par l'un des deux États concernant la demande de transfert.

#### *Article V. Demande de transfert*

1. Chaque transfert de condamné argentin commence par la présentation par l'ambassade de la République argentine au Pérou d'une requête écrite au Ministère péruvien des relations extérieures.

2. Chaque transfert de condamné péruvien commence par la présentation par l'ambassade de la République du Pérou en Argentine d'une requête écrite au Ministère argentin des relations extérieures, du commerce international et du culte.

3. Si l'État de transfert, après avoir examiné la demande de transfert de la personne condamnée, la juge recevable, il doit en informer dès que possible l'État d'accueil de sorte qu'une fois les dispositions nécessaires prises sur le plan interne, le transfert puisse s'effectuer.

4. La remise de la personne condamnée par les autorités de l'État de transfert à celles de l'État d'accueil s'effectue en un lieu convenu entre les deux Parties. L'État d'accueil est responsable de la garde de la personne condamnée et de son transport depuis l'État de transfert. La remise est consignée dans un procès-verbal.

5. Pour décider du transfert d'une personne condamnée de manière à ce que ce transfert facilite sa réinsertion sociale, les autorités de chacune des Parties tiennent compte, entre autres facteurs, de la gravité du délit commis et des relations éventuelles de l'auteur du délit avec la criminalité organisée, de son état de santé et des liens qu'il peut avoir avec la société de l'État de transfert et de l'État d'accueil.

6. Quand l'une quelconque des Parties n'approuve pas le transfert d'une personne condamnée, elle informe sans délai l'autre Partie de sa décision et peut éventuellement indiquer la cause ou le motif du refus.

7. Lorsque l'autorisation de transfert n'est pas accordée, l'État d'accueil ne peut effectuer de nouvelle demande mais l'État de transfert peut revoir sa décision à la requête de l'État d'accueil si celui-ci fait valoir des circonstances exceptionnelles.

8. Avant le transfert, l'État de transfert donne à l'État d'accueil, si celui-ci le demande, l'occasion de vérifier, par le biais d'un fonctionnaire désigné par ce dernier par voie diplomatique et conformément à sa législation, que la personne condamnée y a consenti volontairement et en pleine connaissance des conséquences juridiques qui en découlent.

9. Les frais occasionnés par le transfert sont à la charge de l'État d'accueil. Celui-ci peut toutefois essayer de faire en sorte que la personne condamnée lui rembourse l'ensemble ou une partie de ces frais.

*Article VI. Documentation nécessaire*

1. L'État d'accueil fournit, à la demande de l'État de transfert, les documents ci-après :

a) Copie des dispositions légales pertinentes de l'État d'accueil montrant que les actes ou omissions à l'origine de la condamnation dans l'État de transfert constituent également un délit ou une infraction pénale dans l'État d'accueil;

b) Déclaration traitant des incidences sur la personne condamnée de toute loi ou règle ayant trait à sa détention dans l'État d'accueil après son transfert.

2. En cas de demande de transfert, l'État de transfert doit remettre à l'État d'accueil les documents mentionnés ci-après, à moins que l'une ou l'autre des Parties n'ait indiqué qu'elle s'opposait au transfert :

a) Copie du jugement et des dispositions légales appliquées;

b) Document indiquant la durée de la peine déjà purgée, et fournissant notamment des informations ayant trait à toute détention préventive, remise de peine ou autre circonstance portant sur l'exécution du jugement;

c) Déclaration consignait le consentement au transfert mentionné à l'alinéa 5 de l'article III faite devant les autorités consulaires compétentes;

d) Lorsqu'il existe un dossier médical ou social concernant la personne condamnée, toute information sur son traitement dans l'État de transfert et toute recommandation quant à la poursuite dudit traitement dans l'État d'accueil.

3. Si l'État d'accueil estime que les informations fournies par l'État de transfert ne sont pas suffisantes pour lui permettre d'appliquer la présente Convention, il peut demander des renseignements complémentaires.

14. Les documents remis d'État à État en application de la présente Convention sont exemptés des formalités de légalisation.

*Article VII. Informations concernant l'exécution du jugement*

L'État d'accueil fournit des informations à l'État de transfert concernant l'exécution du jugement :

a) Lorsque la peine a été jugée;

b) Si la personne condamnée s'est évadée;

c) Si l'État de transfert lui demande des renseignements spécifiques.

*Article VIII. Juridiction*

La peine infligée et toute autre procédure visant à réviser ou modifier les jugements prononcés par ses organes judiciaires relèvent de la seule compétence de l'État de transfert.

L'État de transfert reste également libre d'accorder une remise de peine, une amnistie ou une grâce à la personne condamnée. L'État d'accueil, lorsqu'il est informé de toute décision à cet effet, doit prendre sans délai les mesures qui s'imposent conformément à sa législation en la matière.

*Article IX. Exécution du jugement*

1. La peine infligée à la personne condamnée transférée est purgée conformément aux normes du régime pénitentiaire de l'État d'accueil. La nature ou la durée de la peine privative de liberté prononcée par l'État de transfert ne peut en aucun cas être modifiée.

2. Aucune condamnation à une peine privative de liberté ne peut être exécutée par l'État d'accueil d'une façon susceptible de prolonger la durée de la privation de liberté au-delà de la peine de prison infligée par le tribunal de l'État de transfert.

3. Si un national de l'une des Parties purge une peine infligée par l'autre Partie dans le cadre d'un régime de condamnation avec sursis ou de liberté conditionnelle, anticipée ou surveillée, il peut purger ladite peine sous le contrôle des autorités de l'État d'accueil.

4. Les autorités judiciaires de l'État de transfert demandent par voie diplomatique que les mesures de contrôle voulues soient prises.

5. Aux fins du présent article, les autorités judiciaires de l'État d'accueil peuvent adopter les mesures de contrôle demandées, tiennent informé l'État demandeur de la manière dont elles sont mises en oeuvre et l'avisent immédiatement en cas de non-exécution par le condamné des obligations contractées par ce dernier.

*Article X. Mineurs bénéficiant d'un traitement spécial*

La présente Convention s'applique aux mineurs bénéficiant, en application des lois des Parties, d'un traitement spécial. L'exécution d'un jugement prévoyant une mesure privative de liberté s'appliquant à ces mineurs se fait conformément à la législation de l'État d'accueil. Pour que le transfert puisse se faire, il faut obtenir le consentement exprès du représentant légal du mineur.

*Article XI. Facilités de transit*

1. Si l'une quelconque des Parties signe un accord pour le transfert de personnes condamnées avec un État tiers, l'autre Partie doit apporter sa collaboration en facilitant le transit par son territoire des personnes condamnées en vertu dudit accord.

2. L'État ayant l'intention de procéder à ce transfert doit en aviser l'autre Partie.

*Article XII. Application temporelle*

La présente Convention peut s'appliquer également à l'exécution des sentences prononcées avant son entrée en vigueur.

*Article XIII. Exécution*

Afin d'atteindre les objectifs énoncés dans la présente Convention, chacune des Parties adopte les mesures législatives qui s'imposent et établit les mécanismes administratifs adéquats pour que le jugement prévoyant une peine privative de liberté rendu par l'État de transfert et les mesures de sécurité privatives de liberté imposées par ce dernier aient effet légal dans l'État d'accueil.

*Article XIV. Entrée en vigueur de la Convention*

1. La présente Convention est sujette à ratification et entre en vigueur 30 jours après la date d'échange des instruments de ratification respectifs.

2. La présente Convention est conclue pour une durée indéfinie. Chacune des Parties peut la dénoncer moyennant notification écrite par la voie diplomatique. La dénonciation prend effet 180 jours après la date de ladite notification.

En foi de quoi, les personnes dont le nom figure ci-après signent la présente Convention.

Fait à Lima, le 12 août 1998, en deux exemplaires originaux en espagnol, les deux textes faisant également foi.

Pour la République argentine :

GUIDO DI TELLA

Pour la République du Pérou :

EDUARDO FERRERO COSTA

